

59
JUNIO
2012

CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL: ¿Fin de la autonomía política en Europa?

Pere Vilanova, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración,
Universidad de Barcelona, y Senior Associate Researcher en Cidob

Crisis económica internacional: consecuencias políticas internas

La crisis económica internacional, tal como la conocemos en la actualidad (primavera-verano de 2012), no es la primera gran crisis, ni la primera de la cual se derivan costes sociales de grandes proporciones. Hemos conocido las crisis de 1929, 1973, 1979, 1994, y la actual. Han tenido perfiles diferentes: la de 1929 fue financiera y sus consecuencias sociales negativas en Estados Unidos (y luego en Europa) fueron enormes; las de 1973 y 1979 estuvieron relacionadas con el petróleo y en general la dependencia y el gasto energético, la actual (2008-20??) es más complicada, tiene una sobredeterminación financiera, sus costos sociales son y serán considerables. Y es interesante comparar otra variante. ¿En qué medida cada una de ellas ha tenido consecuencias políticas, y de qué tipo? Más concretamente, ¿cómo han afectado estas crisis a los Estados y más genéricamente a los sistemas políticos de cada época?

Todo parece indicar que esta variable es determinante para diferenciar la presente crisis de las anteriores, porque aquí está en juego una revisión potencial no sólo de

tal o cual servicio social, de tal o cual revisión de costes económicos basados en el Estado Social. Está en juego, de manera desigual –ciertamente esto puede variar entre unos países u otros– la relación entre sociedad y política tal como la hemos conocido en las últimas cinco décadas, y las hipótesis posteriores pueden variar desde la más relativamente optimista, a la más pesimista. ¿Por qué esta indeterminación, esta incapacidad de “hacer prospectiva”? Simplemente, porque no existen muchos datos para llevar a cabo una prospectiva mínimamente fiable, que permita orientar con algún sentido las decisiones económicas y políticas.

La crisis económica y financiera internacional se ha instalado en el tiempo, su duración es imprevisible, y sobre todo, hay una gran incertidumbre en relación a cómo será el mundo del día siguiente, en qué cambiarán varias cosas, y no sólo la economía.

Está en juego una revisión potencial no sólo de tal o cual servicio social, de tal o cual revisión de costes económicos basados en el Estado Social. Está en juego, de manera desigual –ciertamente esto puede variar entre unos países u otros– la relación entre sociedad y política tal como la hemos conocido en las últimas cinco décadas,

Un grave fenómeno que se está desarrollando en paralelo: la desafección creciente de los ciudadanos hacia la política, la cultura difusa del abismo que hay “entre ellos (los políticos) y nosotros (los ciudadanos)”, con los aditivos de “todos son iguales”, con los fundados argumentos que se derivan de la proliferación de casos de corrupción, clientelismo, auto-cooptación entre élites, etc.

¿Cómo cambiará la relación entre la sociedad y la política, las formas de presentación de intereses sociales, los cleavages que fragmentan toda sociedad? La cultura del fatalismo es otra derivada del producto crisis. ¿Está aquí para quedarse? Sería el fin de la autonomía de la política como forma de acción colectiva.

La excusa de las exigencias de la dinámica macroeconómica global podría estar generando la pérdida de lo público, la erosión del núcleo duro de lo político en los sistemas políticos europeos. A este respecto, se puede mencionar el aporte del historiador Tony Judt, quien en sus conclusiones sobre dos de sus últimas reflexiones recuerda:

“Cuando la economía y las fuerzas y pautas de acción que la acompañan, son realmente internacionales, la única institución que puede interponerse con efectividad entre esas fuerzas y los indi-

viduos desprotegidos, es el Estado nación... Ese Estado es lo que en última instancia puede aguantar entre sus ciudadanos y esas descontroladas, no representativas, no legitimadas capacidades y poderes de los mercados... es decir, frente a esa multitud de procesos no regulados sobre los cuales los individuos y las comunidades no tienen control"¹.

En efecto, Tony Judt nos recuerda, entre otros, que en la situación actual, más que nunca lo que está en juego es el Estado en su versión *Estado Social y Democrático de Derecho*, tanto en su función interna como en su función internacional o "hacia fuera". Función interna porque, seguir defendiendo "menos Estado y más mercado", o su variante "la mano invisible que lo regula todo con criterios de eficiencia y racionalidad", es una broma de mal gusto. Función externa también, porque una de las cuestiones clave en esta crisis (comparada con las que vivimos en el siglo pasado) es la siguiente: el mundo como sistema internacional complejo, se ha complicado cualitativamente hasta extremos sin precedente, y no basta invocar como una *mantra* las palabras "globalización", "potencias emergentes", "China, India y Brasil", o el "desplazamiento del centro de gravedad desde Europa hacia Asia-Pacífico". Todo ello es relevante, pero construir una teoría de la política (que incluya la relación Estado-Sociedad adaptada a nuestro

La excusa de las exigencias de la dinámica macroeconómica global podría estar generando la pérdida de lo público, la erosión del núcleo duro de lo político en los sistemas políticos europeos.

tiempo) requiere más que tres o cuatro eslóganes.

¿Qué es lo que hay que revisar y repensar?

Un punto de partida es el de tomar nota entre el desfase creciente (el "gap" si se prefiere) entre el funcionamiento real y actual de la economía mundial, así como sus consecuencias internas (empleo, investigación, consumo, crecimiento) en cada país, y el inmovilismo estructural de nuestros sistemas políticos. Lo primero ha cambiado, y mucho, pero sobre todo lo intuimos o lo damos por demostrado y evidente, pero nadie —o muy pocos— parecen estar en condiciones de explicarlo de manera *completa* y convincente. Lo segundo llama más aun la atención.

Nuestros gobiernos, nuestros procesos electorales, nuestros partidos políticos, el funcionamiento de nuestros parlamentos, la complejidad de los procedimientos legislativos y normativos en general, todo ello, funciona sobre los mismos mecanismos formales de los últimos sesenta, ochenta o cien años. Este desfase entre "procesos económicos" que van por su cuenta como electrones libres, y nuestros sistemas políticos basados en mecanismos institucionales de otro siglo,

generan varias reacciones en nuestras sociedades. Una de ellas afirma que ciertamente esto es así, y es inevitable, tan fatalmente inevitable como que el sol tiene una vida limitada (5.000 millones de años) y que frente a eso, no hay nada que hacer. Por tanto, como mucho hemos de intentar *adaptarnos*, como pasa con el cambio climático.

Una segunda reacción se deriva de un fenómeno que se ha desarrollado en paralelo: la desafección creciente de los ciudadanos hacia la política, la cultura difusa del abismo que hay "entre ellos (los políticos) y nosotros (los ciudadanos)", con los aditivos de "todos son iguales", con los fundados argumentos que se derivan de la proliferación de casos de corrupción, clientelismo, auto-cooptación entre élites, etc.

Una tercera cuestión a tener en cuenta es el doble fenómeno de la aceleración de los tiempos de la política, y su relación causal con la "dictadura de la comunicación". La decisión pública se ha acelerado por la compresión de los tiempos de análisis, reflexión y debate, y la dictadura del "mensaje" ya no es sólo la dictadura de la forma sobre el contenido, sino de lo breve sobre lo analítico, lo superficial sobre lo estratégico, el eslogan sobre el programa. En Europa occidental los procesos electorales desde 2008 y hasta hoy, justo después de

las elecciones presidenciales francesas (potencialmente de mucha trascendencia a escala europea) y entre las dos tandas electorales de una Grecia desarbolada, arrojan elementos de reflexión interesantes. Así por ejemplo, en la primavera de 2012, el

movimiento de los Indignados prendió en España de manera espectacular y se prolongó durante un mes y medio. En la semana que hubo más concentraciones y manifestaciones en cuarenta ciudades de todo el país, la suma de personas movilizadas simultáneamente llegó aproximadamente a doscientos ochenta mil, pero en las elecciones generales subsiguientes, que ganó el Partido Popular (conservador) por mayoría absoluta y condujo al PSOE (socialistas) al peor resultado desde 1977, fueron a votar unos veinticinco millones de personas. Resignadas, indignadas, escépticas, probablemente, pero es relativamente secundario: fueron a votar. Es decir, que la crisis puede haber erosionado la calidad de la democracia representativa, y el estado de ánimo colectivo de las personas, en relación al régimen político en el que viven, pero no ha modificado de modo sostenido la columna vertebral de la democracia representativa, que a día de hoy no parece tener un elemento de sustitución en el horizonte.

¿Hay pérdida de soberanía?

Con cierta voz de alarma, el Profesor de Ciencia Política Josep María Colomer vaticina "El fin de la democracia estatal"², desarrolla un sorprendente argumento. Afirma: "que un Estado miembro de la Unión Europea tenga partidos de

1. Tony Judt, *Ill fares the land*, Allen Lane-Penguin, Londres 2010; y Tony Judt, *Reappraisals*, Penguin, Londres 2008

2. Joseph Maria Colomer, "El fin de la democracia estatal", *El país*, 2/03/2012

derechas o de izquierdas en el Gobierno, en la práctica, no comporta una gran diferencia. Es la Unión Europea (UE), o al menos un pequeño grupo dirigente formado en los últimos años en torno a la Presidencia del Consejo Europeo, el que ha tomado el control de las tareas más fundamentales y tradicionales de los gobiernos estatales. La oportunidad creada por la actual crisis financiera y económica está completando la pérdida de soberanía de los Estados. Y sin no hay Estado, no hay democracia estatal por supuesto". El juicio puede parecer excesivo, y algunos de sus argumentos son discutibles, pero plantea ciertamente una cuestión de fondo. La idea de que es esta crisis lo que habría provocado la *desaparición* de la soberanía del Estado es absurda. Se puede argumentar, por ejemplo, que la soberanía del Estado se ha ido *erosionando*, o se ha visto *funcionalmente limitada* por constreñimientos externos, y poderes *de facto* tanto externos (supranacionales) como internos (los grupos financieros por ejemplo). Pero su atribución *formal de soberanía* sigue intacta, y no hay hipótesis de sustitución a día de hoy. Y son sólo los estados, en última instancia, quienes pueden y tienen el deber de tomar decisiones formales que obligan a todos. El debate sobre la reforma (o no) del Tratado de la Unión, o el nuevo Tratado en materia de disciplina económica y fiscal (2012) son buena prueba de ello.

Pero tiene razón el profesor Colomer cuando plantea una paradoja de fondo. Dice "Mientras la adopción de políticas públicas vinculantes se sitúa cada vez más al nivel de la UE, los decisores a nivel europeo surgen todavía de elecciones a nivel estatal. Para que la democracia sobreviva y se recupere en Europa, la rendición de cuentas y el control de los gobernantes deberían moverse desde el nivel estatal al nivel de la Unión, donde ya se toman decisiones relevantes". Ciertamente, pero sólo parcialmente, porque el problema no es sólo éste. Al fin y al cabo, los jefes de Estado y de Gobierno que toman decisiones en Bruselas, surgen de procesos electorales abiertos y competitivos, aunque es cierto que la deriva burocrática de la UE en muchos campos de las políticas públicas surge de órganos no-electivos, como la Comisión. Pero las grandes decisiones, y en última instancia, los propios miembros de la Comisión salen de negociaciones y consenso entre aquellos (jefes de Estado y de Gobierno) ¿O es que alguien piensa todavía que la solución sería elegir por sufragio universal a la Comisión, ese "gobierno de Bruselas"? Muchos se preguntan, por el contrario, si es salvable el Parlamento europeo, que desde 1979 ha visto decrecer regular y sostenidamente su nivel de representatividad, hasta una media europea que hoy se sitúa en un escaso 42%.

El problema que plantea el Profesor Colomer es real, pero la raíz del problema es otra. Los fenómenos de especulación financiera, por definición hoy ya totalmente transnacionales y globales, escapan *totalmente* a la capacidad de regulación

normativa, de control institucional, de *accountability* de todos nuestros sistemas políticos estatales, así como de la UE. Hasta el punto que ésta (la UE) y aquellos (los estados de la UE) se están convirtiendo en *intermediarios* y *ejecutores* de estos fenómenos financieros especulativos no sujetos a control de legalidad (ni nacional ni supranacional), dando por probada la tesis de que ha de ser así porque no tienen (los gobiernos europeos y la UE) ni margen de maniobra, ni alternativas. Y aquí es donde en última instancia podría acabar naufragando la política, si la entendemos como la formulación de propuestas para la acción colectiva.

Elecciones: ¿para qué?

Desde 2010 han habido tres decenas de elecciones en veintiocho países de la UE (más Croacia). En veinte casos el partido gobernante ha perdido y ha sido sustituido por otro partido, lo cual significa que en dos tercios de los casos el gobernante es apartado del cargo por los votantes, aunque se supone que en general el gobernante —salvo casos extremos de castigo electoral— tiene cierta ventaja en el control y gestión del calendario electoral. Por tanto, una pauta específica inherente a esta crisis, es la de la generalización del castigo electoral como reflejo sociológico de los ciudadanos, que sin necesari-

La crisis puede haber erosionado la calidad de la democracia representativa, y el estado de ánimo colectivo de las personas, en relación al régimen político en el que viven, pero no ha modificado de modo sostenido la columna vertebral de la democracia representativa, que a día de hoy no parecer tener un elemento de sustitución en el horizonte.

amente creer que el gobierno entrante lo hará mejor, decide que alguien tiene que hacerse responsable de la mala situación. En Alemania por ejemplo, sin elecciones generales en el horizonte, el Partido de la canciller Ángela Merkel ha perdido más de media docena de elecciones en otros tanto Länder (de hecho, en todos los que ha habido elecciones regionales menos en Sarre). En paralelo, resulta en principio chocante que en Italia y Grecia (hasta sus recientes elecciones de mayo y junio), el cambio de gobierno no se haya producido por vía electoral, sino por una decisión externa y supranacional de algunos (pocos) *poderes fácticos*: el llamado fenómeno *Merkozy* + "Bruselas". La sorpresa aumenta porque en ambos casos, de todas maneras, se ha salvado la preocupación por guardar las formas, y sin elecciones generales, se ha recurrido al mecanismo constitucional de dimisión del primer ministro, debate parlamentario, votación de investidura, y formación y toma de posesión del nuevo Gobierno. Algunos apuntan a un doble interrogante. ¿Por qué este hecho ha provocado furiosas (y duraderas) reacciones sociales en Grecia, con duros enfrentamientos en las calles de las principales ciudades, y no en Italia, con una larga tradición de manifestaciones po-

pulares por cuestiones políticas y sociales? ¿Es el *berlusconismo* y su escandaloso comportamiento el responsable de esta aparente falta de reacción a lo que técnicamente puede ser definido como un *golpe de Estado*? ¿O se puede hablar incluso de *alivio colectivo*? En Portugal ha habido algunas reacciones, pero no como en Grecia, y en España, la reciente huelga general del 29 de marzo no fue una movilización marginal ni mucho menos, si bien el “remake” del 15M en su primer aniversario ha mostrado claramente las limitaciones del movimiento. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no, en países europeos con rasgos sociológicos relativamente comunes?

En este contexto, las campañas electorales adquieren un aire grotesco. Los partidos, sobre todo los que están en el gobierno, abordan estas elecciones de la crisis en muy malas condiciones: por lado han de hacer olvidar que han estado gobernando al menos desde 2008, y aun cuando tendrían varios motivos para explicar que *no es culpa suya*, es decir, que las causas de la crisis son externas, supranacionales, globales, de los mercados, de la *globalización* (sic); por el otro han de prometer que habrá cambios, que son *el cambio*, o que (si sus equipos de comunicación son imaginativos) son *el menor de los males*, que con los otros

El balance es desolador (sobre todo en Grecia, Portugal, España y en buena parte, Italia), la política entendida como acción colectiva se ve reducida a la simple revuelta como expresión del rechazo social colectivo, y la política como actividad gubernamental, se ve reducida a la gestión sistémica de un naufragio. Revuelta, no revolución, protesta, no propuestas.

será peor, y que está en juego *el Estado del bienestar*. En realidad, curiosamente, los partidos conservadores de casi toda Europa, afronten las elecciones desde la oposición o desde el gobierno, afirman no sólo que no quieren dismantelar las políticas sociales, sino que son su mejor garantía. Los partidos que están en la oposición, por su parte (y el caso del Partido Popular en España en estos primeros meses de 2012 es revelador) han de ir con mucho cuidado con lo que prometen que van a hacer, no sólo por el peligro de no ser creídos. En tiempos de crisis la demagogia ha adelgazado: el principal problema es que digan lo que van a hacer, y *sean creídos*. Por ello, desde la oposición, lo mejor es callar, esperar que la crisis acabe de erosionar al Gobierno saliente, rezar porque haya tenido que hacer el grueso de las políticas de austeridad y de recortes sociales. Incluso en estas condiciones, cualquier propuesta de políticas financieras o fiscales con voluntad “socialdemócrata dura”, como la que formuló el candidato Hollande sobre la imposición del 75% a las “grandes fortunas”, suena a extravagancia aunque no lo sea necesariamente. Por ejemplo, se podría recordar a este respecto³ que Roosevelt aumentó los impuestos, y el tipo impositivo llegó a ser del 90% para las fortunas de más de 100.000 \$ (de

aquella época). Bien, era Roosevelt, era el New Deal, pero Eisenhower no aligeró mucho este tipo de impuesto, y con Nixon, estaba en el 60%. La revolución impositiva a favor de los ricos data de las presidencias Reagan y su derivada europea, la Sra Thatcher. De allí hasta la imposición a menos del 20% de Warren Buffet y del candidato Romney hay un trecho que es espectacular, pero no tiene por qué ser totalmente irreversible.

Pero una de las consecuencias internas irrefutables de la crisis reside paradójicamente en el margen que todavía les queda al Estado y en general a las instituciones gubernamentales (en los estados descentralizados, federales o no) para ejecutar los recortes sociales y presupuestarios allí dónde sólo ellos pueden hacerlos, aunque tales recortes hayan sido decididos “fuera”: el sector público, los funcionarios, las empresas parapúblicas y las políticas sociales que por definición no puede ser ejecutadas (sólo) con criterios de coste/beneficio, por ejemplo sanidad y educación. Aquí, el balance es desolador (sobre todo en Grecia, Portugal, España y en buena parte, Italia), la política entendida como acción colectiva se ve reducida a la simple revuelta como expresión del rechazo social colectivo, y la política como actividad gubernamental, se ve reducida a la

gestión sistémica de un naufragio. Revuelta, no revolución, protesta, no propuestas. Y de ahí crece y se desarrolla la *antipolítica*, que en última instancia define al movimiento de los *Indignados* como objetivamente paradójico.

“La indiferencia, la peor de las actitudes”

La actual crisis no la han originado ni los trabajadores de la sanidad ni los de la escuela pública, ni los despedidos de tal o cual multinacional. Es una crisis mundial originada por malas prácticas financieras y que ha desencadenado un cataclismo en cadena, de arriba abajo, de tal manera que las inevitables medidas traumáticas acaban acumulándose en los de abajo. Quizá la palabra pobres, en el sentido que tenía en la Europa de 1890, es excesiva, pero el *explotado* de hoy es el *tax payer* ordinario, el ciudadano que no puede -le guste o no- hacer grandes contorsiones contables y sobre el que recae el peso de la crisis. Y aquí es donde los Indignados tienen razón: «El motivo de la resistencia es la indignación», no solo el cálculo racional, el análisis científico de los datos macroeconómicos. En otras palabras, seguramente porque las medidas serán duras y duraderas, es tiempo de gestos simbólicos que escenifiquen una cierta voluntad de equidad. Y no es aceptable que los directivos de algunas de esas agencias de calificación, como el propio Congreso de EEUU denunció, se aumenten el sueldo un 69% (salarios de nueve millones de dólares). A propósito de la movilización contra los recortes en la sanidad pública, más allá de que los gobiernos se resistan a admitir que no se puede hacer así, lo más urgente en el terreno de lo simbólico es que entiendan que no se pueden decir ciertas cosas. «La indiferencia, la peor de las actitudes», afirma Stéphane Hessel en su ya famoso panfleto “*Indignez vous*”, y tiene bastante razón. Aunque luego falten las propuestas de alternativas políticas reales y factibles.

3. Ver De Standard, citado por *Courrier International* n° 1116, marzo 2012.

Uno de los peores peligros de esta deriva de desorden social y desvanecimiento de lo político, es el de la fragmentación de los «campos de reacción» por parte de la ciudadanía. Cada sector, cada segmento, está siendo sometido a su particular guerra de desgaste, y mucha gente cree que es una fatalidad, no cabe una respuesta transversal. Primero fueron los funcionarios (“unos privilegiados, no temen por su puesto de trabajo”), luego los trabajadores con contrato fijo (“idem”), luego los propios sindicatos (nunca pero valorados desde 1945) presentados como defensores corporativos de sus propios puestos de trabajo. En suma, el lado más oscuro de la presente crisis es haber instalado en el ambiente una turbia dinámica de acusaciones y sospechas de unos sectores sociales contra otros, pero a la vez, muy sutilmente, con la música ambiental de “de todas maneras, no se puede hacer nada”. Es decir, no se consigue ni establecer ni restablecer el mínimo de reacción social colectiva transversal para decir basta. ¿Dónde están los mercados? Quiénes los dirigen? ¿De dónde viene su legitimidad? Y claro, médicos y enseñantes, parados y empleados, jóvenes (en España, un 42% de paro entre los menores de 30 años!) piensan que la protesta ha de ir contra el Gobierno, pero ¿es verdad? ¿es realista? ¿es el/los Gobierno/s quien ha creado la crisis? ¿Sí y no? Pero, sobre todo, ¿pueden los gobiernos someterla a control, a la crisis y sobre todo a sus efectos sociales? Parece que no, que seguro que no. La crisis del 2008 es mundial, sus causas son globales, sus responsables no están en un radio de 500 kilómetros de mi casa o de la suya. El problema podría ser definido como que la indignación creciente, dispersa, fragmentada, frente a un fenómeno como el que está sucediendo debería ser global, mundial, internacional, pero de momento no viene precedida, organizada o encuadrada por su expresión política. ¿Cómo pasar de las protestas a la acción propositiva?

Conclusión: tres preguntas

Primera pregunta: ¿Por qué el Banco Central Europeo inyecta masivamente dinero al 1% de interés al sector bancario europeo, y esos bancos (en varios países) abren el crédito a las instituciones gubernamentales (ayuntamientos, provincias, gobiernos regionales, gobierno central) al 5%? Respuesta: no se puede dejar caer al sector bancario, porque entre otras cosas, no habría crédito. Pero no hay crédito de todas maneras, y el ciudadano puede preguntarse varias cosas, que se resumen en que el BCE está subvencionando a la banca privada para que en los próximos tres a cinco años tenga garantizado un beneficio del 4%.

Segunda pregunta: ¿En última instancia, las ideologías han muerto? ¿Seguro? Y la lucha de clases, ¿ha muerto? Es propio de toda sociedad que se dote de instituciones, normas y formas de legitimidad social, para que las contradicciones

sociales entre clases, grupos, facciones, etc., transcurran por cauces no destructivos. Y esto está siendo pulverizado por la crisis, y en concreto por las consecuencias que la crisis está teniendo sobre nuestros sistemas políticos. El debate/dilema sobre, en caso de crisis, cómo combinar adecuadamente medidas de rigor, disciplina económica y estímulo a la economía, tiene siglo y medio de antigüedad, y el debate entre paro, inflación, deuda, déficit, y como utilizarlos estratégicamente, también.

Tercera pregunta: ¿alguien cree realmente que las ideologías y las clases han muerto? Las ideologías hoy van de la indignación al fatalismo, pasando por la crítica y el rechazo a la artificiosidad y superficialidad del *relato de los partidos políticos*, y su subsiguiente alejamiento de la ciudadanía. En última instancia el problema es otro: en la actualidad no sabemos cuales son las clases enfrentadas. Hemos de repensar *profundamente* una de las mayores mutaciones de los últimos veinte/treinta años: la verdadera complejidad de nuestras sociedades contemporáneas, sus líneas de fractura, sus líneas de confrontación, la fragmentación de sus campos de reivindicación, y sobre todo, cómo han cambiado sus múltiples

La crisis del 2008 es mundial, sus causas son globales, sus responsables no están en un radio de 500 kilómetros de mi casa o de la suya. El problema podría ser definido como que la indignación creciente, dispersa, fragmentada, frente a un fenómeno como el que está sucediendo debería ser global, mundial, internacional, pero de momento no viene precedida, organizada o encuadrada por su expresión política. ¿Cómo pasar de las protestas a la acción propositiva?

modos de representación de intereses. Tanto en relación a partidos políticos como a los sindicatos, como a las múltiples formas asociativas de la sociedad civil.

En síntesis, frente a la crisis actual, cabría preguntarse quién representa a quién, de qué manera y con qué medios de acción. ¿Y con qué objetivos?